

# Libertad

Informe Nuevos Frentes elaborado para el Consejo General de la CSI  
Octubre de 2015



# Índice

---

Introducción	3
La eliminación de los espacios democráticos	4
Las consecuencias de los ataques a los derechos y libertades y las respuestas de la CSI	7
Consecuencia: Conflictos y desplazados	7
Consecuencia: Corrupción	9
Consecuencia: Impunidad y delitos violentos	12
Consecuencia: Desigualdad y ataques a los derechos de los trabajadores/as	14

# Introducción

---

**NUESTROS DERECHOS Y LIBERTADES ESTÁN SIENDO ATACADOS. LOS ESPACIOS DEMOCRÁTICOS SE ESTÁN REDUCIENDO Y LA GENTE CADA VEZ SE ENFRENTA A MAYORES NIVELES DE INSEGURIDAD Y MIEDO.**

Millones de personas inmersas en conflictos bélicos temen por sus vidas, dando como resultado el mayor desplazamiento de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial en busca de un lugar seguro. El gasto militar mundial asciende a casi 1,8 billones USD (el 2,3% del PIB mundial). El costo económico y humano del conflicto armado en Siria, Iraq y otros países es incalculable.

Por otro lado, cientos de millones de personas, pese a no verse afectadas por conflictos armados, viven bajo un constante temor a la represión por parte de Gobiernos autoritarios que les deniegan derechos y libertades individuales, la libertad sindical y derechos laborales.

Además, ciudadanos/as de todo el mundo temen perder su trabajo y sus ingresos, dado que el desempleo sigue batiendo récords históricos.

Los ciudadanos ya no confían en sus Gobiernos. La Encuesta Mundial de la CSI de 2012 reveló que solo el 13% de la población cree que los votantes pueden influir en las decisiones económicas. La de 2013 reveló que solo el 13% de los ciudadanos/as cree que su Gobierno se preocupa por los intereses de las familias trabajadoras. Y en la de 2014 no hay ni un solo país en el que una mayoría crea que el sistema económico es justo con la mayoría de la población.

Se están perdiendo puestos de trabajo y el desempleo juvenil se está convirtiendo en un problema estructural acompañado de síntomas de colapso social y disturbios. La desigualdad está aumentando y los salarios no consiguen repuntar debido al estancamiento económico y a los ataques a los salarios mínimos y la negociación colectiva. La protección social también está sufriendo ataques en una época en que es más necesaria que nunca, lo cual refuerza el empobrecimiento provocado por la austeridad y la política dominada por las grandes empresas. La corrupción es cada vez más endémica si cabe y siguen saliendo a la luz pruebas de las consecuencias negativas que conlleva en todas las regiones.

Además, la inestabilidad climática incrementa aún más los riesgos. Distintos países y comunidades están sufriendo catastróficos fenómenos meteorológicos que causan estragos, y el espectro de graves trastornos y conflictos provocados por el cambio climático se cierne cada vez más cerca.

La humanidad se enfrenta a enormes retos que solo se pueden abordar mediante el compromiso y la participación de los ciudadanos para encontrar soluciones y aplicarlas. La democracia es crucial para que los pueblos sean capaces de forjar su futuro. Sin embargo, los derechos consagrados en la ley, la libertad sindical, la libertad de expresión y la libertad de reunión de los trabajadores y trabajadoras y sus sindicatos, de la sociedad civil y de ciudadanos de todas partes están siendo atacados; los espacios democráticos se están reduciendo.

# La eliminación de los espacios democráticos

---

## **NO PUEDE EXISTIR UNA VERDADERA DEMOCRACIA SIN SINDICATOS LIBRES, REPRESENTATIVOS E INDEPENDIENTES.**

La representación colectiva democratiza los lugares de trabajo y permite a los trabajadores y trabajadoras ganar una parte justa de los ingresos que produce su trabajo y negociar unas condiciones laborales decentes. Los sindicatos y la negociación colectiva reducen la desigualdad mediante el aumento de los salarios mínimos y contribuyen a la reducción de la pobreza y al fomento de las economías sostenibles. La demanda económica depende del poder adquisitivo de los trabajadores/as y el estancamiento de la economía mundial se debe en gran medida a decisiones políticas que limitan o impiden del todo la negociación colectiva. Por tanto, los sindicatos son, por definición, los impulsores de un movimiento progresista que lucha por unas sociedades justas y equitativas.

Sin embargo, los trabajadores y trabajadoras no están aislados de sus comunidades. La democracia y el Estado de derecho son esenciales para que los sindicatos puedan contribuir eficazmente a las políticas sociales y económicas y obligar a los Gobiernos a rendir cuentas cuando los intereses de los trabajadores/as no se reflejen en los procesos de toma de decisiones.

Es por ello que a lo largo de la historia los sindicatos han estado en primera línea de las luchas por el cambio democrático y la justicia social. En muchos países constituimos la voz organizada de la oposición a Gobiernos que actúan a las órdenes del poder corporativo y de los intereses creados. Los sindicatos se movilizaron con éxito contra el régimen racista del apartheid en Sudáfrica y resistieron a las dictaduras militares organizando huelgas y protestas en masa en países como Brasil.

Más recientemente, la UGTT ha sido crucial para movilizar y negociar la transición democrática en Túnez y para evitar el derramamiento de sangre que sufrieron otros países durante la llamada “Primavera Árabe”. Los sindicatos fueron la fuerza impulsora para redactar una constitución tunecina que garantizara unos principios fundamentales, como la separación de poderes, un poder judicial independiente, la libertad sindical, el derecho de sindicalización y el derecho de huelga. Los logros de la UGTT forman parte de la gran tradición del activismo sindical en la lucha por la democracia y el Estado de derecho en todo el mundo.

Sin embargo, los Gobiernos represores y sus aliados empresariales siguen redoblando esfuerzos para reducir los espacios democráticos. Los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales que exigen debates públicos, rendición de cuentas y participación, suponen una enorme amenaza para la concentración de poderes que beneficia a una pequeña élite.

En muchos países, los derechos fundamentales, como la libertad sindical, el derecho de reunión y de expresión, que no solo constituyen los pilares de las sociedades democráticas sino que permiten la participación de trabajadores y ciudadanos en la toma de decisiones, están siendo atacados con el pretexto de la seguridad.

Los Gobiernos están usando la amenaza terrorista como un caballo de Troya, como un pretexto para suprimir las libertades fundamentales que constituyen la piedra angular de cualquier sociedad democrática. En otros países, las medidas de austeridad y el deseo de atraer las inversiones extranjeras se han utilizado para adoptar leyes y políticas represivas que reducen la participación.

Se están aplicando asimismo barreras jurídicas e institucionales para limitar la influencia activa de la opinión pública. Casi la mitad de los países del mundo han establecido controles que afectan a decenas de miles de organizaciones de todo el planeta, restringiendo el derecho a la libertad de reunión, de asociación y de expresión.

En otros casos, la falta de un marco jurídico ha reforzado la marginación tradicional de las mujeres, los jóvenes y las minorías. En dichos casos, las normas culturales y las relaciones de poder existentes determinan quién participa en la vida política y quién queda al margen.

Se ha incrementado enormemente la cifra de detenciones arbitrarias de trabajadores y trabajadoras a causa del ejercicio legítimo y pacífico de sus derechos. Según datos del Índice Global de los Derechos de la CSI para 2015, el año pasado el número de países que utilizaron estas detenciones para silenciar e intimidar a activistas aumentó de 35 a 44.

El año pasado, el Director General de la Policía de Hong Kong anunció que “los principales organizadores del movimiento de los paraguas”, incluidos los líderes sindicales, serían detenidos por las reuniones y protestas pacíficas que habían llevado a cabo.

En Europa, numerosos activistas han sido detenidos o sometidos a procesos penales por oponerse a las medidas de austeridad mediante huelgas y protestas, incluso en democracias bien establecidas como España.

En Uzbekistán y diversos países de la región se han presentado en repetidas ocasiones cargos penales falsos contra activistas de la sociedad civil.

En 2014, alrededor de 1.400 personas fueron condenadas a la pena de muerte en Egipto por unas protestas contra la inestabilidad política que degeneraron en disturbios. Y en 2011, alrededor de 1.900 detenidos fueron torturados por haber participado en el movimiento de protesta de Bahrein.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas, 61 periodistas fueron asesinados en todo el mundo en 2014. Asimismo, según datos de la ONG Global Witness, al menos 116 activistas ecologistas fueron asesinados en 2014.

Los Gobiernos represivos también han utilizado procesos de registro engorrosos, imprecisos y sin criterios transparentes como un obstáculo para los sindicatos y la sociedad civil. Las solicitudes no se tramitan en un plazo fijo de tiempo y los solicitantes no reciben ninguna explicación ni se les otorga un proceso de recurso cuando les deniegan el registro. Las solicitudes se retienen indefinidamente y se rechazan sin explicación alguna.

En al menos 57 países hay leyes que limitan el libre establecimiento de sindicatos sin autorización previa, reduciendo así su capacidad para realizar actividades pacíficas y legítimas. Asimismo, los activistas de la sociedad civil son cada vez más el objetivo de ataques mediante dichos procesos. En China se ha aprobado una nueva ley que obliga a las ONG a registrarse ante la policía y obtener una autorización para llevar a cabo sus actividades, además de tener que presentar planes anuales de actividades y presupuestos a una agencia de supervisión.

Además, los Gobiernos han empezado a controlar y recortar la financiación a los programas relacionados con la democracia y los derechos fundamentales. Los grupos internacionales de apoyo se tienen que enfrentar al acoso y a las amenazas de acciones legales vejatorias. También se prohíben cada vez más acciones internacionales de solidaridad.

India ha catalogado a la ONG ecologista Greenpeace como “antinacional”, bloqueando sus cuentas bancarias, deportando a trabajadores/as extranjeros e impidiendo que los nacionales viajen al extranjero. Las licencias de más de 13.000 organizaciones en India han sido revocadas por la presunta violación de una ley sobre financiación extranjera.

Mediante el control y la restricción de los fondos de solidaridad procedentes del extranjero, la dictadura de Bielorrusia está atacando a los sindicatos independientes que luchan por una verdadera representación de los trabajadores y trabajadoras.

En Kazajstán y Azerbaiyán existen severas restricciones al apoyo a los sindicatos procedente del extranjero.

Sin duda, los Gobiernos centrales desempeñan un papel fundamental en la tendencia mundial que consis-

te en eliminar espacios democráticos. A menudo, los políticos locales también forman parte del problema, pues cultivan relaciones corruptas con las fuerzas de seguridad, las empresas y la delincuencia organizada, y hacen que las actividades pacíficas y legítimas resulten difíciles e incluso peligrosas. Esto es especialmente frecuente en ámbitos como el de la tierra y los recursos, áreas en las que están involucradas las empresas energéticas, las industrias de la extracción, las producciones agrícolas a gran escala y la promoción inmobiliaria. Además, se sabe que algunas organizaciones multilaterales toleran las violaciones por parte de los Gobiernos o contratistas.

Un reciente informe de la ONG *Human Rights Watch* titulado *At Your Own Risk* ha revelado que el Banco Mundial no fomentó un entorno propicio para la participación pública y la responsabilidad social en países en los que tiene programas y en los que los espacios democráticos son limitados o se están recortando. Además, el Banco Mundial tampoco ha abordado de forma proactiva los esfuerzos de ciertos Gobiernos por socavar estos derechos, incluso en los casos en los que la gente era víctima de abusos precisamente por haber intentado informar a los mecanismos de responsabilidad del Grupo del Banco Mundial sobre cuestiones relacionadas con los derechos. Funcionarios del Gobierno y ejecutivos de empresas han intimidado o acosado a críticos de los proyectos financiados por el Grupo del Banco Mundial, amenazándoles con agresiones físicas, de muerte y procesos penales infundados y les han sometido a vigilancia. Algunas activistas han sufrido abusos y amenazas sexistas. En otros casos, funcionarios del Gobierno y ejecutivos de empresas han amenazado a los críticos con su trabajo, ya sea con despedirles, recortarles los beneficios o aumentarles la carga de trabajo.

Los ciudadanos están respondiendo: se organizan a nivel mundial y se hacen oír fuera del ámbito de la política tradicional. En muchos lugares de todo el mundo,

ciudadanos y ciudadanas de diferentes ámbitos se unen para apoyar cuestiones que afectan profundamente a sus vidas, pero que sus Gobiernos ignoran.

En Chile, tras 20 años sin movilizaciones populares de gran envergadura, una amplia coalición de estudiantes y sindicatos ha empezado a exigir una educación pública universal y democrática, medidas más enérgicas para proteger los derechos de los trabajadores y la separación del mundo empresarial de las élites del poder político y de la elaboración de políticas. El 28 de marzo de 2015, más de 100.000 personas salieron a la calle a protestar y quince días después más de 200.000 chilenos y chilenas se manifestaron en todo el país para expresar su inconformidad con la insuficiencia de la reforma educativa.

En septiembre de 2015, decenas de millones de trabajadores/as indios participaron en una huelga nacional convocada por diez grandes organizaciones sindicales para protestar contra los planes anunciados por el primer ministro Modi de despojar, a instancias de inversores locales y extranjeros, a grandes sectores de la fuerza laboral del país de la protección que ofrece la legislación laboral.

En septiembre, las principales centrales sindicales de Indonesia (KSBSI, KSPI y KSPSI) organizaron una campaña nacional relacionada con los salarios mínimos y la legislación laboral que incluyó una manifestación de 25.000 trabajadores/as en Yakarta.

Las protestas se siguen de manera multitudinaria, pero en su gran mayoría las manifestaciones siguen siendo pacíficas, a pesar de las reacciones de las fuerzas de seguridad, a menudo desproporcionadas y violentas. Está claro que en todos los países, incluidas las democracias con Gobiernos progresistas, los trabajadores/as y los ciudadanos deben exigir y defender los espacios políticos y la democracia.

# Las consecuencias de los ataques a los derechos y libertades y las respuestas de la CSI

## Consecuencia: Conflictos y desplazados

La consecuencia más trágica de la actual situación mundial ha sido la magnitud del desplazamiento de personas a causa de conflictos armados. Los Gobiernos de determinados países están atacando a sus propios

ciudadanos, la población se ha alzado en armas en conflictos interétnicos y territoriales. Miles de personas huyen de sus hogares por miedo al extremismo y al terrorismo.



El mundo se enfrenta a la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, con un 80% de los desplazados en países en vías de desarrollo. Los recientes acontecimientos han abierto los ojos de los Gobiernos europeos a la crisis, pero no todos han aceptado la responsabilidad de acoger a los refugiados que huyen de la guerra, el terror y la pobreza extrema. Países como Turquía, Líbano y Jordania necesitan más ayuda. En casi todas las naciones, la compasión de los ciudadanos de a pie es superior a la de sus Gobiernos.

Los nuevos datos del ACNUR revelan que a finales de 2014 casi 60 millones de personas habían sido desplazadas de sus hogares. La mitad de los desplazados son niños. En 2014, casi 14 millones de personas más fueron desplazadas. Turquía, Irán y Pakistán albergan el mayor número de refugiados. Uno de cada cuatro refugiados ha sido acogido en países en vías de desarrollo.

Para acabar con los conflictos y los desplazamientos se requiere un verdadero compromiso político, así como cooperación internacional y unas medidas conjuntas que trasciendan los intereses específicos de cualquier nación. La acción sindical debe formar parte de este esfuerzo y la CSI está respondiendo mediante el trabajo sobre paz y migración en sus frentes y ámbitos prioritarios.



"La gente aquí hace lo que puede. Comparten, pero no tienen suficiente ni para ellos mismos. Estamos aquí por la guerra. Lo que queremos es que la guerra cese para poder volver a casa".

**Busan,  
refugiado sirio en Turquía**

Fotografía: CSI

## Respuesta: Paz

La CSI está comprometida en la vía de la no proliferación de las armas nucleares y de destrucción masiva y en la aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas de las Naciones Unidas y va a enviar una delegación sindical a la Conferencia de Desarme para el Desarrollo que se celebrará en Berlín en septiembre de 2016.

Nuestras actividades regionales y subregionales también se centrarán en los ataques a la libertad sindical y en el papel de dicha libertad para garantizar la estabilidad, la seguridad económica y la paz social.

La Confederación Sindical Internacional Árabe ha iniciado la tarea de luchar contra el terrorismo con una gran conferencia en 2015 y ha desarrollado un plan de seguimiento para 2016.

## Respuesta: Migración

La migración es una de las prioridades de la CSI. Además de los planes trazados para 2016, seguiremos luchando por la protección social, el derecho al trabajo y otros derechos civiles y políticos para todos los refugiados y solicitantes de asilo. También seguiremos exigiendo un nivel adecuado de recursos para ayudar a los desplazados y que el desplazamiento se reconozca como un reto del desarrollo.

Reconocemos la compasión y generosidad del pueblo turco que ha abierto sus hogares y comunidades a dos millones de refugiados y felicitamos a Alemania por su liderazgo en Europa. Todas las naciones deben hacer más para acoger a los refugiados y abordar las causas y consecuencias de esta crisis mundial.

## Consecuencia: Corrupción

La corrupción está invadiendo todas las esferas de la actividad humana. Gobiernos, funcionarios públicos, grandes empresas y organismos deportivos, culturales y comunitarios acaban atrapados o perjudicados por escándalos de corrupción en todas las regiones. Además, la evasión fiscal corporativa sigue provocando enormes daños fiscales y las empresas cada vez usan más las posibilidades que ofrece la economía digital para evitar el cumplimiento de la ley, incluida la legislación laboral. Muchos países carecen de la voluntad política para legislar y procesar al respecto. Por tanto, el Estado de derecho no puede aplicarse.

Los escándalos en la FIFA han abierto un nuevo frente en la lucha contra la corrupción y han puesto de manifiesto los vínculos existentes entre la corrupción y la violación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

La corrupción está socavando nuestros sistemas financieros, nuestras democracias y el Estado de derecho.



"Hablo en calidad de jugador. Si Qatar no cambia, tendremos una Copa del Mundo de la vergüenza y de la esclavitud, porque no respeta los derechos humanos".

**Abdeslam Ouaddou,**  
**ex-futbolista marroquí**

Fotografía: Damienne Caron

## Respuesta: Coherencia Global

La evasión fiscal es un asunto importante. Ahora, el G20 se ha comprometido a apoyar los principios de la OCDE para acabar con la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS).

La campaña por una tasa sobre las transacciones financieras (TTF) sigue adelante.

El CGU dispone de una red fiscal coordinada por la ISP. Se requiere una gobernanza con responsabilidad de la ONU.

El trabajo con el COI sobre los "derechos en el deporte" empezó con la campaña Juego Limpio, que culminó con el compromiso del Comité Olímpico de respetar "los derechos humanos y las obligaciones internacionales" en las ciudades/naciones sede de los eventos y que ahora se ha ampliado al atletismo y a otros deportes.

El Instituto para los Derechos Humanos y Empresas y la OCDE han puesto en marcha iniciativas importantes a favor de los derechos y la transparencia relacionados con el Estado de derecho en las naciones sede de los eventos y los organismos deportivos.

La petición de una "comisión de reforma independiente" para la FIFA ha sido apoyada por los principales patrocinadores. La campaña seguirá adelante, presionando para que todas las ciudades/naciones elegidas como sede de algún evento deportivo, incluyendo Qatar, se comprometan a respetar los derechos laborales. Además, dichos derechos fundamentales deben respetarse en las cadenas de suministro de todas las empresas de construcción, producción, transporte y servicios asociadas a los eventos deportivos.

## Respuesta: Controlar el poder empresarial

El poder de las multinacionales es ahora tan hegemónico que ha corrompido el comercio mundial. Los altos ejecutivos saben bien que muy a menudo sus beneficios aumentan gracias a los bajos salarios con los que sus trabajadores/as no pueden vivir dignamente; que dichos beneficios ponen en riesgo la seguridad, provocando lesiones y muertes injustificables en el lugar de trabajo; y que los beneficios aumentan debido a la evasión fiscal o están vinculados trágicamente a la contaminación de la tierra y el agua de las comunidades, mientras sus grupos de presión consiguen que los Gobiernos ignoren el Estado de derecho que les obligaría a rendir cuentas.

La mano de obra oculta de las grandes empresas a través de sus cadenas de suministro asciende a decenas de millones de trabajadores/as y cada vez incluye más trabajo informal y esclavitud.

La campaña de la CSI “alto a la codicia corporativa” impulsará una movilización mundial contra la corrupción de las cadenas de suministro y a favor de un salario mínimo vital, de los derechos y de un trabajo seguro respaldados por el Estado de derecho nacional y transfronterizo. El G7 ha reconocido la gravedad del asunto, pero ahora debe actuar.



## Respuesta: Eliminar la esclavitud

Qatar ha sido el eje central de los esfuerzos para acabar con la esclavitud y así seguirá. Asimismo, la CSI ha ampliado su ámbito de trabajo a los Emiratos Árabes Unidos, Mauritania, Níger y Paraguay. El Protocolo sobre Trabajo Forzoso de la OIT nos permite organizarnos a nivel nacional y transnacional.

Sin embargo, las empresas que utilizan mano de obra esclava también serán un objetivo; las vamos a desenmascarar y, en la medida de lo posible, a demandar.



## Respuesta: Países en situación de riesgo

La CSI y la CSA han llevado a cabo una exitosa campaña para que la Comisión Internacional de la ONU contra la Impunidad en Guatemala siguiera con su trabajo, lo cual tuvo como resultado el procesamiento por corrupción del Presidente de Guatemala y otros altos cargos del Gobierno.

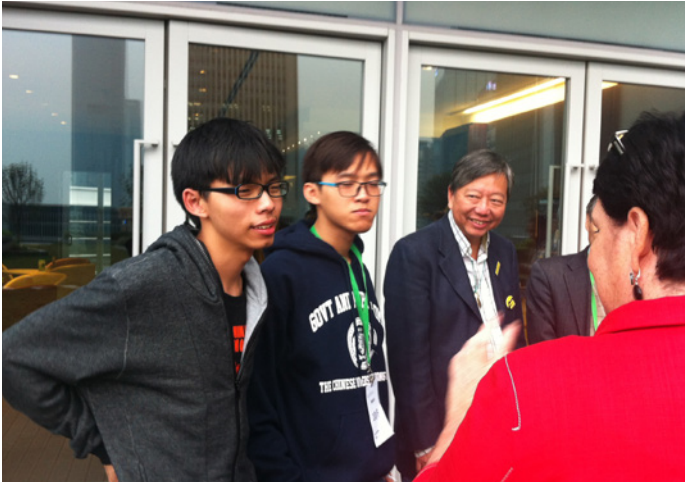
El vínculo existente entre la corrupción y la grave violación de los derechos de los trabajadores/as, incluido el asesinato de numerosos sindicalistas, resulta evidente en Guatemala. Sin embargo, parece que ahora se está abriendo un nuevo capítulo en la historia de esta nación centroamericana.

# Consecuencia: Impunidad y delitos violentos

Los conflictos en numerosos países han tenido como consecuencia altos niveles de impunidad y un aumento de los delitos violentos. No solo en Guatemala se detiene, encarcela, asalta y asesina a sindicalistas. El Índice Global de los Derechos de la CSI registró un aumento de las detenciones en 2015.



La violencia contra las mujeres está aumentando. El 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual, y entre el 40 y el 50% ha sido víctima de insinuaciones sexuales no deseadas, acoso físico y otras formas de acoso sexual en el trabajo.



"Implicarme en la acción de la plaza Cívica ha sido la mejor decisión que he tomado en los cuatro años que estoy involucrado en los movimientos sociales estudiantiles. No me voy a arrepentir, incluso si tengo que pagarlo caro".

**Joshua Wong,  
Hong Kong student leader**

Fotografía: CSI

## Respuesta: Países en situación de riesgo

La lista de alerta de la CSI se centra principalmente en soluciones nacionales e internacionales para acabar con la impunidad. En el marco de la continua sindicalización y movilización, las actuales demandas para la Comisión de Investigación de la OIT incluyen a Guatemala, Fiji y Qatar.

Asimismo, la CSI está comprometida a garantizar una nueva norma de la OIT sobre la violencia de género.

# Consecuencia: Desigualdad y ataques a los derechos de los trabajadores/as

Los ataques a los derechos de los trabajadores/as han aumentado y aunque el Índice Global de los Derechos reveló que los países árabes son la peor región para los trabajadores y trabajadoras, en 2015 el mayor deterioro de derechos se ha dado en Europa.



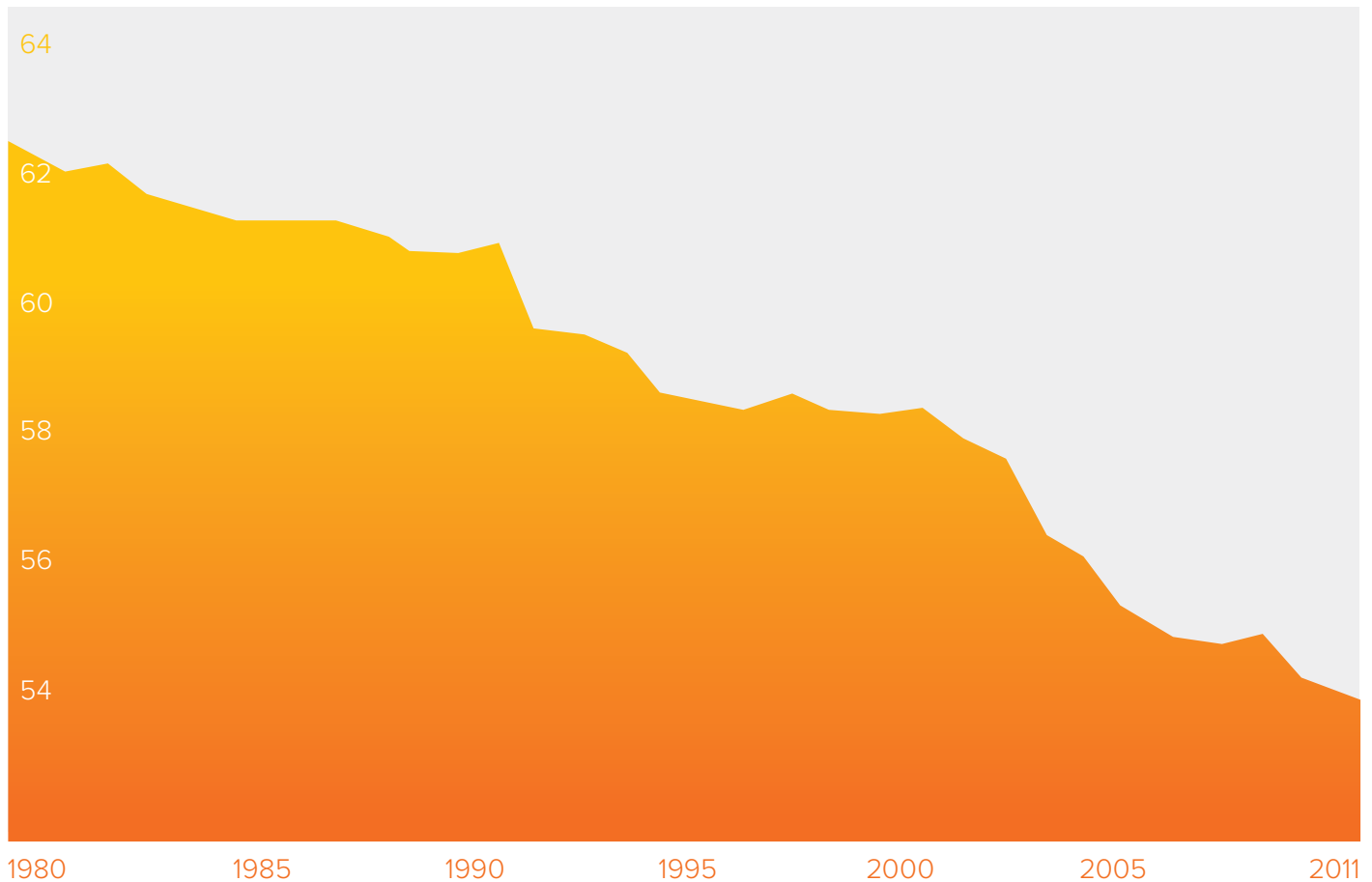
Si esto se combina con los bajos salarios y la caída de la participación salarial en el PIB en casi todos los países, queda claro que la desigualdad está aumentando y la demanda mundial ha disminuido, lo cual sitúa a los trabajos en una situación de mayor riesgo.



"Los empleadores no comparten su riqueza. Si no se puede negociar colectivamente no puede obtenerse un salario decente".

**Cristina,  
España**

## Proporción de las rentas del trabajo en la producción bruta mundial



Fuente: UNCTAD (2013), Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, pág.16

### Respuesta: Coherencia Global

Todas las instituciones financieras internacionales reconocen ya la desigualdad como un riesgo mundial, pero la lucha para aplicar soluciones (salarios mínimos vitales, convenios colectivos, derechos y protección social) continúa.

Los Ministros de Trabajo del G20 respaldaron estas medidas como una parte importante de la solución para aumentar los ingresos. El reto consiste en que los líderes hagan lo mismo y en impulsar su aplicación.

La crisis de los refugiados requiere soluciones globales. La CSI apoya el derecho al trabajo y otros derechos políticos y sociales con la garantía de una protección social.

### Respuesta: Organización

Organizar y movilizar a los miembros son la clave para consolidar el poder de los trabajadores/as y, a su vez, para poder equilibrar la estructura de poder mediante reformas políticas y la negociación colectiva. La Academia de Organización de la CSI se centra en la formación de organizadores principales para garantizar eso mismo.

La defensa de la democracia y las libertades fundamentales constituye la piedra angular del trabajo de la CSI y es una característica fundamental de muchas de nuestras actividades. En 2016, se propone celebrar una cumbre de un día sobre las Libertades y Derechos Democráticos, vinculada a la 16ª reunión del Consejo General de la CSI.

**No se pueden hacer concesiones respecto a las libertades y los derechos democráticos.**

